LITORALPRESS

Fecha: 09-05-2025
Medio: La Segunda
Supl. : La Segunda
Tipo: Noticia general
Título: **“Si no hacemos un ajuste grande al gasto, podría no haber recursos para pagar la PGU”**

Pág. : 12
Cm2: 703,9

Tiraje: 11.692
Lectoría: 33.709
Favorabilidad: No Definida

“Para aumentar esos ingresos no se requiere pasar por el Congreso, basta con que el Gobierno haga cumplir la ley"

Cecilia Cifuentes:

“Si no hacemos un ajuste grande al gasto, podría no haber recursos para pagar la PGU”

Una de las principales asesoras económicas de Evelyn Matthei analiza la compleja situación fiscal que enfrentará el próximo gobierno.

Felipe O'Ryan

La economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, Cecilia Cifuentes, es una de las principales asesoras en temas económicos de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Desde esa posición ha analizado el panorama fiscal que enfrentará quien asuma el próximo gobierno.

El diagnóstico, señala —coincidiendo con muchos otros economistas—, es grave. “El país tiene un déficit estructural de entre 2% y 3% del PIB”, estima, lo que implicaría, en términos generales, un desfase de entre US$7.000 y US$10.000 millones entre ingresos y gastos. Se trata de un problema de carácter estructural, parte del entramado fiscal de largo plazo, y no de simples fluctuaciones cíclicas.

“Creo que hay una gran posibilidad —no del 100%, pero significativa— de que Evelyn Matthei sea la próxima presidenta del país. Pero lo que se ve más difícil es tener mayoría en el Congreso. Entonces uno debe trabajar bajo el supuesto de que no contará con esa mayoría parlamentaria, y que tendremos que intentar hacer ajustes de gasto por la vía administrativa”, explica.

—¿Y cómo buscarán hacer esos recortes?

—Habrá que explorar mecanismos legales para reducir el gasto, y en ese sentido, el consenso político será clave. Creo que se ha ido generando justamente ese consenso de que es necesario hacer un ajuste de gasto más significativo, porque si no lo hacemos, en el futuro podrían no haber recursos para pagar cosas tan relevantes como la PGU.

La situación fiscal que deja Marcel al próximo gobierno

—El mes pasado, el Ministerio de Hacienda publicó su último Informe de Finanzas Públicas (IFP), donde sinceró una compleja situación fiscal para 2025. ¿Qué destaca del informe?

—Detecté dos elementos preocupantes al analizarlo en profundidad: primero, que nuevamente se mantiene un sesgo optimista en las estimaciones de ingresos fiscales, y segundo, que las medidas correctivas asumidas por Hacienda para reducir el gasto difícilmente se cumplirán en su totalidad.

—¿El Gobierno vuelve a sobreestimar los ingresos fiscales? ¿Por qué?

—En este IFP se ajustaron a la baja las proyecciones de ingresos tributarios y totales respecto de lo estimado en la Ley de Presupuestos 2025. Pero ya al elaborar esa ley se habían sobreestimado los ingresos de 2024. Entonces, al corregir también esas cifras según lo efectivamente recaudado, vemos que el Gobierno aún proyecta un crecimiento real anual de 9% en los ingresos fiscales para este año. Esa cifra es inviable. Dudo que se cumpla.

—Y por el lado del gasto, usted dice que las medidas correctivas anunciadas por Hacienda no son suficientes. ¿Por qué?

—También presentan un sesgo optimista, porque suponen cambios legislativos que difícilmente se aprobarán, como el fin del CAE. En las proyecciones fiscales de mediano plazo, uno de los criterios es no considerar ingresos o gastos de proyectos de ley no aprobados. Por eso, que el Gobierno lo presente como una medida correctiva no es razonable.

—Pero políticamente, ¿no es astuto lo que hace el ministro Marcel al compartir la responsabilidad con el Congreso?

—Sí, claro. Pero también hay que transparentar la realidad. La misma directora de Presupuestos, Javiera Martínez, reconoce que el 92% del gasto público está definido por ley y que, si se quisiera hacer un ajuste mayor, habría que pasar por el Congreso. Y tiene razón. Pero para aumentar la recaudación combatiendo la evasión en el Transantiago o las licencias médicas falsas, para aumentar esos ingresos no se requiere pasar por el Congreso; basta con que el Gobierno haga cumplir la ley. Lo mismo con empezar a cobrar el CAE. Pero esas medidas tienen un alto costo político para este Gobierno, que llegó con un discurso favorable a la condonación del CAE, a evadir el Metro, etcétera.

—Desde la oposición se ha dicho que todos los gobiernos se han equivocado en sus estimaciones fiscales. ¿No es injusta la crítica contra Marcel, entonces?

—Yo hice el análisis porque también escuché esa defensa. Y claro, ha habido errores en el pasado, pero iban en ambas direcciones: a veces se subestimaban y otras veces se sobrestimaban los ingresos. Pero con este gobierno siempre ha habido sobreestimación.

—¿Por qué cree que ocurre esto?

—Porque si el Gobierno presentara una estimación más realista del déficit, la evaluación ciudadana sería muy negativa. Pero el déficit estructural real del país es de entre 2% y 3% del PIB. Esa es la realidad de Chile, pero el Gobierno no la transparenta.

El CAE y la gratuidad

—Usted dice que este déficit es estructural. ¿De qué gobierno es la responsabilidad?

—Hace diez años, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se hizo una reforma tributaria que buscaba recaudar tres puntos del PIB. Esos recursos se destinaron, entre otras cosas, a financiar la gratuidad en la educación superior y, más adelante, la PGU. Pero esa reforma terminó recaudando solo 0,5% del PIB. Si me preguntas, creo que hacia adelante se deberán tomar medidas para hacer cambios estructurales en el gasto.

—¿Cuáles serían esas medidas?

—Por ejemplo, sin afectar a los actuales estudiantes, habrá que revisar a futuro la gratuidad en la educación superior. Habrá que comenzar a cobrar realmente el CAE, reducir la evasión en el Transantiago y combatir el contrabando de cigarrillos. Ahí hay mucha plata. Todo eso tiene un costo político, pero no hay otra alternativa. Sobre la gratuidad, se podrían explorar fórmulas donde solo algunas carreras, como pedagogía, sean gratuitas, y el resto se pague en función de los ingresos. El CAE cuesta cerca de US$500 millones al año, y sigue creciendo.

—¿Revisar la gratuidad es idea suya o de Matthei? ¿Lo ha conversado con ella?

—Son planteamientos míos, porque no estoy viendo los temas de educación dentro del equipo.